



ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DEL POSCONFLICTO EN CALI

AUTORES

ANDRÉS CAMILO MENDOZA PATIÑO

VALENTINA RODRÍGUEZ PASMIÑO

DIRECTOR DEL PROYECTO DE GRADO

TOMÁS LOMBANA BEDOYA

UNIVERSIDAD ICESI

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS

ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

SANTIAGO DE CALI

2016



ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS DEL POSCONFLICTO EN CALI

AUTORES

ANDRÉS CAMILO MENDOZA PATIÑO

VALENTINA RODRÍGUEZ PASMIÑO

DIRECTOR DEL PROYECTO DE GRADO

TOMÁS LOMBANA BEDOYA

UNIVERSIDAD ICESI

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS

ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

SANTIAGO DE CALI

2016

CONTENIDO

RESUMEN.....	4
OBJETIVOS.....	4
1. MARCO TEÓRICO	5
1.1 Antecedentes históricos de la guerra.....	5
1.2. Historia de la guerra.....	7
1.2.1. Características generales.....	7
1.2.2. Períodos del conflicto armado.....	8
1.2.3. Actores del conflicto.....	9
1.2.4. Permanencia.....	12
1.3. Contexto de la Situación Actual.....	12
1.4. Posconflicto y Paz.....	14
1.5. Justicia Transicional.....	17
1.6. Contexto Histórico en el Valle del Cauca	18
1.7. El Sector Empresarial en el Posconflicto.....	22
1.8. Variables Económicas Presentes en el Proceso de Paz	22
2. METODOLOGÍA	23
3. RESULTADOS	24
3.1. Opinión sobre el posconflicto.....	24
3.2. Político.....	28
3.3. Económico.....	33
3.4. Sociedad	34
4. CONCLUSIONES.....	36
BIBLIOGRAFÍA.....	37

RESUMEN

Este proyecto no se trata solamente de una investigación económica, política, sociológica o psicológica de cómo está preparada Cali para el posconflicto, sino que es un estudio a través de herramientas de investigación de mercados que permite ver la percepción general a través de los líderes de la sociedad respecto al posconflicto.

Para ello se realiza un extenso marco teórico para caracterizar la situación actual de la guerra siguiendo la trayectoria histórica que la ha marcado y posteriormente una investigación de campo en la cual se encontró la falta de preparación que posee Cali para un posible posconflicto.

Palabras Claves: Colombia, posconflicto, líderes, preparación, percepción.

ABSTRACT

This project it is not just an economic, politic, sociologist investigation, but it is a study using market research tools that allows to know the general perspective of the post-conflict through the eyes of the community leaders.

Therefore, at first it is showed an extensive theoretical framework to characterize the actual situation of the war fallowing its own path dependence and the investigation in which was found the poor preparation of Cali for a plausible post-conflict.

Keywords: Colombia, post-conflict, leaders, preparation, perception.

OBJETIVOS

Objetivo general:

- Investigar las condiciones en las que se encuentra la ciudad de Cali para afrontar un posible proceso de posconflicto.

Objetivos específicos:

- Contextualizar el marco del conflicto armado en Colombia.
- Estudiar el posible método para una paz efectiva.
- Exponer la posición de diferentes líderes de Cali frente al posible posconflicto.

1. MARCO TEÓRICO

1.1 Antecedentes históricos de la guerra

Colombia, como muchas otras naciones de latinoamérica, presentó un proceso de independencia violento y desde entonces su historia ha sido marcada por los conflictos que no cesaron después de ello. “Lo cierto del caso ha sido que la construcción de la democracia y el ejercicio de la política en nuestro caso han estado acompañados por la violencia” (Guerra & Plata, 2005).

A comienzos del siglo XX, finalizaron los conflictos presentados por las diferencias entre los ideales centralistas y federalistas que después de la creación de la Constitución de 1886 bajo un gobierno centralista, pareció disuadir las tensiones entre los bandos. Sin embargo, el cambio de siglo no llegó con aires de paz, puesto que los dos partidos políticos de Colombia, los Liberales y los Conservadores ya estaban implementando la violencia como medio para medir sus diferencias. Muchos estudiosos como William Ospina, Miguel Ángel Serrano Monteavaro, Claudia Muñoz, Takeushi, entre otros confirman la semilla del inicio del conflicto armado actual en estos acontecimientos. Contiendas como las de 1876, 1885, 1895 y la Guerra de los Mil Días que finiquitó en 1902 son guerras civiles que dan cuenta de los ataques entre los partidos.

El nuevo siglo arrastró consigo este nuevo choque ideológico y se avivó durante los largos periodos que estuvieron en el poder cada partido (Hegemonía Conservadora y República Liberal). Este fue el comienzo de lo que los historiadores han llamado “la época de La Violencia” (1946-1958) y como lo expone Claudia Muñoz (2013) “constituyó el germen del conflicto armado que desde principios de los años sesenta del siglo pasado ha venido desarrollándose en Colombia y hasta el día de hoy tiene plena vigencia ”

En 1946, tras la división del partido liberal entre Gabriel Turbay Abunader, candidato oficial representante de la sociedad oligarca liberal, y Jorge Eliécer Gaitán, candidato del pueblo y de la clase trabajador con gran apoyo popular, los conservadores retoman el poder, provocando

que el nuevo estado multiplique la sangrienta persecución entre los partidos, sobretodo en esta oportunidad contra los liberales en diferentes municipios del país.

Para el año de 1948, el asesinato de Gaitán representó la muerte del ideal de una Colombia más equitativa y de arrebatar el poder a las oligarquías tradicionales desde los entornos de la política. En este momento la violencia tomó medidas más drásticas y organizadas, sobretodo después de que Laureano Gómez se posicionara en el poder. “A partir de entonces, el conflicto político se tradujo en una abierta confrontación armada” (Grupo de Memoria Histórica, 2013). Después de esto, aparecieron “Los Pájaros” y los “Chulavitas” de parte del gobierno Conservador que asesinaban a sus opositores con ideales gaitanistas, liberales. Entre los reprimidos se encontraban los movimientos agrarios, obreros y populares urbanos. Tras estos acontecimientos, aparecieron varias guerrillas liberales y las autodefensas comunistas para defenderse y ejercer algún control sobre el territorio nacional que estaba fuera del poder estatal (Grupo de Memoria Histórica, 2013).

Esta sucesión de eventos que llevaron a la creación de estas guerrillas liberales es ampliamente aceptada por la comunidad académica. El historiador y economista Kalmanovitz lo afirma de la siguiente forma:

“La violencia fue generando necesariamente el movimiento guerrillero liberal y comunista, que primero se planteó la defensa contra la abierta persecución política pero que luego fue dando paso a crecientes brotes de organización, con la conformación de columnas que comenzaron a contratascar a la policía y los chulavitas, obligando la presencia cada vez más visible del ejército en el conflicto” (Kalmanovitz, 2015).

Finalmente, se formó el Frente Nacional en 1958 el cual creaba un monopolio político pues se alternaba el poder entre los partidos tradicionales, mientras se enterraba de una forma oficial el derecho de expresarse políticamente. Como toda oposición legal a este acuerdo fue prohibida, estos fueron las condiciones adecuadas para que las personas con ideales comunistas

buscarán el poder o un refugio en las guerrillas que habían quedado después de la desmovilización y amnistías extendida por Rojas Pinilla en 1953.

Los grupos que habían surgido en ese entonces “se convertirían en grupos guerrilleros en los sesenta y setenta, bajo la influencia de la Revolución Cubana” (Takeuchi, 2009). Fue durante este periodo que se crearon las guerrillas que más marcaron la historia del país en los últimos 50 años: Las FARC, el ELN, el M19. Por su parte, Miguel Ángel Serrano Monteavaro (2013) afirma que El Partido Comunista Colombiano fue una gran influencia para el nacimiento de las FARC las cuales se autoproclamaron marxista-leninista, a la búsqueda de la creación de un Estado socialista.

1.2. Historia de la guerra

“El conflicto armado colombiano es un fenómeno que involucra diferentes variables, las cuales le dan un carácter singular y complejo que no permite un análisis sencillo o unilateral; por el contrario, su análisis requiere de múltiples miradas e interpretaciones” (Barón Porras, 2004). Por esta razón en este apartado se estudiarán 4 apartados. Primero se expondrán características generales que el conflicto ha presentado durante su duración y como los académicos lo han denominado, después se discutirá los periodos en los cuales se ha desarrollado y sus diferencias, posteriormente se diferenciarán los actores que han protagonizado el conflicto, y por último, se hablará de las razones por la cual el conflicto ha permanecido hasta la actualidad.

1.2.1. Características generales.

La caracterización del conflicto armado durante su historia ha sido el punto de enfoque de muchos estudios. En resumen se podría decir que:

“Desde sus orígenes hasta hoy, la evolución de los más importantes grupos guerrilleros ha sufrido cambios significativos, y de igual manera ha evolucionado la intensidad del conflicto armado. (...) éste no se puede clasificar como étnico, religioso o separatista. Es más bien una disputa por el poder y la definición del orden social en el nivel local

(Duncan 2004) y, aunque ha abarcado gran parte de la geografía nacional, tiene focos y corredores en donde su intensidad es más pronunciada”(Takeuchi, 2009)

Adicionalmente, se puede analizar las características de este conflicto armado como el autor Eduardo Pizarro León Gómez (2004) concluye en su texto “Una democracia asediada”. Para él, las principales características son: 1) Una confrontación armada interna, en tránsito hacia un conflicto regional complejo, es decir, aunque los enfrentamientos y la violencia armada transcurre esencialmente en el territorio Colombiano, los impactos de la violencia en las fronteras del país, como con Ecuador o Venezuela, no lo convierte inmediatamente en un conflicto inter-estatal, en un mundo globalizado. 2) La problemática colombiana entra en la modalidad de una guerra no convencional, en este caso, la guerra de guerrillas, es decir, pequeñas unidades que utilizan la táctica de golpear y correr. 3) Sus orígenes se encuentran en el plano ideológico y no en cuestiones relacionadas con etnia, religión o lengua. 4) Se caracteriza por ser una confrontación armada prolongada, pues si se toma como su inicio la conformación de las guerrillas de las FARC y ELN, es el cuarto conflicto más antiguo de la actualidad.

1.2.2. Períodos del conflicto armado.

Una vez, definida las características generales, se distinguirá los periodos por los cuales el conflicto ha evolucionado y cambiado. El Grupo de Memoria Histórica (2013) fue capaz de repartir los sucesos de esta larga confrontación en cuatro periodos. El primero de ellos transcurre entre 1958-1982 y agrupa la transición de la violencia bipartidista que se trató en el primer apartado, a la violencia subversiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas a diferencia de las movilizaciones sociales previas y por la marginalidad del conflicto armado. El segundo periodo (1982-1996) se caracteriza por el escalonamiento de la guerra, por la apropiación de una proyección política, la expansión territorial y el crecimiento militar de las guerrillas, debido a la fuente de financiación y acumulación de poder que propició el narcotráfico y su auge como lo explica Muñoz García (2013). A partir de ese momento,

aparecen otros miembros armados del conflicto, los “grupos de autodefensa campesina” o los grupos paramilitares, creados “como reacción a los grupos insurgentes y a la ausencia total del Estado en amplias zonas del territorio nacional” (Muñoz García, 2013). En este periodo también se puede encontrar el auge y declive de la Guerra Fría con sus consecuencias en las ideologías guerrilleras, la nueva Constitución Política de 1991, además de los procesos de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos.

El tercer periodo (1996-2005) se considera el umbral de recrudescimiento del conflicto armado. Durante estos años el Estado estimuló la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar del conflicto armado, sustentados en que por medio de esta lucha se enfrentaría al narcotráfico y el terrorismo. Finalmente, el último periodo (2005-2012) marca una diferencia en el conflicto, ya que se distingue por una ofensiva militar del Estado con su máxima eficiencia debilitando pero no eliminando totalmente la guerrilla, la cual se reacomodó militarmente. Además, se produce el fracaso de la negociación política con los grupos paramilitares, lo que conlleva a un fortalecimiento y un recrudescimiento de sus fuerzas y acciones.

1.2.3. Actores del conflicto.

A lo largo del conflicto armado se identifican los principales actores que han estado presente a lo largo del conflicto, los cuales se clasifican en dos categorías: el sector armado y la sociedad civil. Dentro de los actores armados se encuentran las guerrillas, los Paramilitares y la Fuerza Pública, los cuales han incorporado el ataque a la población civil como parte de su estrategia de guerra, aunque cada actor difieren en las modalidades de violencia empleadas e intensidad de su accionar según las evaluaciones que hacen del territorio, del momento de la guerra y de las estrategias que despliega. Un ejemplo de esto, lo plantea el Centro de Memoria Histórica: “la violencia contra la integridad física era el rasgo distintivo de la violencia paramilitar, mientras que la violencia contra la libertad y los bienes define la violencia guerrillera” (¡Basta Ya!, 2013).

Las principales guerrillas colombianas que han estado presente en el conflicto han sido las FARC, el ELN, el EPL y el M-19. Sin embargo, debido a que este texto tratará del final del conflicto armado con las FARC, se describirá a continuación detenidamente.

Las FARC surgen en medio del contexto descrito en el primer apartado, de la unión de la violencia política y la defensa del territorio. Su origen según Saumeth se encuentra en las luchas rurales de las tres primeras décadas del siglo XX, en medio de las autodefensas agrarias campesinas apoyadas por el Partido Comunista Colombiano (Saumeth CITA) y lideradas por otros jefes comunistas (¡Basta ya!, 2013). La transformación de estas autodefensas comunistas en las FARC empieza tras la aparente paz que trajo el General Rojas Pinilla en su presidencia, en cuyo tiempo las guerrillas se re-agruparon en las denominadas “repúblicas independientes” de Marquetalia, El Pato, Riochiquito y Guayabero. Posteriormente, se asesinó a uno de sus jefes principales, Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro por parte de las guerrillas liberales, lo que provocó que el segundo líder, Manuel Marulanda, denunciara lo ocurrido con las autoridades (Molano Bravo, 2014). El Ejército le respondió que irían al lugar para imponer orden, pero Marulanda lo toma como amenaza contra sus hombres por lo cual el 11 de enero de 1960 dejaron sus herramientas de trabajo y volvieron a los fusiles. Durante todo el año 1963, Marulanda amplió la influencia de estas autodefensas y en 1964 el Ejército realiza una ofensiva militar a dichas “repúblicas independientes” y nuevamente en 1966. En 1966 lo que se había consolidado como el Bloque Sur se constituyó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Por su parte, la historia del ELN y el EPL la resume el Centro de Memoria Histórica:

“Se remiten al encuentro entre los jóvenes habitantes de las ciudades formados y radicalizados según los lineamientos de las revoluciones cubana y china, y los herederos de las antiguas guerrillas gaitanistas del Magdalena medio, el alto Sinú y el valle del río San Jorge (la mayoría campesinos), unos y otros descontentos con las

restricciones de participación política en el Frente Nacional.” (¡Basta Ya!, 2013. Pág 123)

Los militares son la fuerza armada de parte del Gobierno que tiene como misión conducir operaciones orientadas a defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial, proteger a la población civil, los recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, que garantice el orden constitucional de la nación. Sin embargo, en medio de esta confrontación tan prolongada, los militares se vieron envueltos tanto en los ataques contra las organizaciones del margen de la ley, como ataques y violencia contra la población civil.

Otro de los actores del conflicto armado son los paramilitares, ellos surgieron como una defensa a los grandes propietarios tal y como lo menciona William Restrepo en Conflicto Armado y Alternativas de Paz

“En cuanto al paramilitarismo (...) este movimiento es multifacético desde su origen y comprende desde la defensa de los intereses de los grandes propietarios tradicionales, pasando por las demandas de las autodefensas campesinas, hasta las acciones de grupos armados al servicio del narcotráfico” (Restrepo, 2011)

Todos los autores de la guerra mencionados con anterioridad han generado impactos y daños devastadores sobre la sociedad colombiana. Puesto que los actores armados no han escatimado en el uso de la violencia y existen prácticas que fueron usadas más frecuentemente por unos que por otros como se mencionó con anterioridad y se volvieron distintivas de su accionar. Como lo menciona el Grupo de Memoria Histórica en su estudio ¡Basta Ya!:

“Los paramilitares estructuraron e implementaron un repertorio de violencia basado en los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas y la sevicia, las amenazas, los desplazamientos forzados masivos, los bloqueos económicos y la violencia sexual. Las guerrillas recurrieron a los secuestros, los asesinatos selectivos, los ataques contra bienes civiles, el pillaje, los atentados terroristas, las

amenazas, el reclutamiento ilícito y el desplazamiento forzado selectivo. (...) La violencia de los miembros de la Fuerza Pública se centró en las detenciones arbitrarias, las torturas, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas, así como en los daños colaterales producto de los bombardeos, y del uso desmedido y desproporcionado de la fuerza”. (Basta Ya, 2013)

1.2.4. Permanencia.

Por último, el grupo de investigadores de Memoria Histórica ha presentado algunas de las razones por las cuales este conflicto ha perdurado por más de 50 años y se ha convertido en uno de los conflictos con vigencia más largos del mundo. Entre ellas se encuentra el problema agrario presente por la distribución inequitativa de las tierras y los desplazamientos por la violencia; la irrupción y la propagación del narcotráfico que les permitió un medio económico para las guerrillas de subsistir; las limitaciones y posibilidades de la participación política; las influencias y presiones del contexto internacional; la fragmentación institucional y territorial del Estado.

1.3. Contexto de la Situación Actual

Para entrar a analizar los planteamientos teóricos, se debe mencionar que durante los años del levantamiento armado, el Estado intentó de diversas formas, ofensivas y pacíficas, terminar con este conflicto pero ninguna de ellas cumplió este objetivo. Estos intentos han sido tan variados como el episodio de las negociaciones del Caguán de Pastrana, un intento de lograr la paz en una negociación que comenzó con la zona de distensión y resultó en un reforzamiento de las FARC; hasta el ataque tan severo realizado por el congresista Álvaro Uribe Vélez durante su mandato como presidente de la República. En el presente, desde noviembre del 2012 las FARC ha comenzado un proceso de paz que se espera sea diferente a sus predecesores, para finalmente llegar a un acuerdo que termine con este enfrentamiento.

El inicio y las características de las negociaciones quedaron pactadas en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Sandoval

Forrero (2013) realiza una descripción resumida de lo que se lleva a cabo en estas negociaciones en “Ways for peace in Colombia” y explica que, con el auspicio de los Gobiernos de Cuba y Noruega, los diálogos son una búsqueda negociada de la paz por parte tanto del Estado Colombiano como de las FARC-EP. Además, considera que ambas partes acuerden esto tiene una connotación importante puesto que significa que el gobierno acepta un conflicto social y político en el país, reconociendo a las FARC como una entidad política, mientras que las FARC reconoce que el camino de la violencia no dará el resultado que esperan y la negociación política es la salida más civilizada a este conflicto.

Cabe aclarar, como lo hizo Sandoval Forrero (2013), que esta agenda está inspirada en las negociaciones realizadas en los “Acuerdos de Paz” del gobierno de El salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y es muy similar a “Los acuerdos de Paz” que se realizaron entre el Estado/Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. La agenda de negociación que adelantan el gobierno y las FARC según lo pactado en el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de un paz estable y duradera” es la siguiente: 1. Política de desarrollo agrario integral , 2. Participación política, 3. Fin del conflicto, 4. Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Víctimas y 6. Implementación, verificación y refrendación.

Miguel Ángel Serrano Monteavaro (Serrano Monteavaro, 2013), comenta sobre los diferentes puntos a negociar que van mucho más que solo el cese de los ataques violentos, sino que tratan temas de desarrollo social y económico. Se toman temas de reforma agraria, acceso y uso de la tierra, del desarrollo social en cuanto a la salud, la educación, la vivienda, la erradicación de la pobreza, la integración de los exguerrilleros en la vida política y una posible solución al problema de las drogas

Este documento publicado al inicio de las negociaciones levantó muchas respuestas. En el interior del país, dentro de las personas en contra de lo acordado estaba el expresidente Álvaro Uribe el cual afirmó que a las FARC “debía aplicárseles el Código Penal y no cualquier

amnistía política; los guerrilleros no son merecedores de la confianza del Gobierno; y, finalmente, para negociar es necesario un alto el fuego previo y bilateral, tanto más cuanto los guerrilleros lo habían pedido y no fue aceptado por el Gobierno” (Serrano Monteavaro, 2013). Por otro lado, tanto en el interior como en el ambiente internacional existe una reacción positiva con apoyos de gobiernos como el de Brasil, Argentina, España, Estados Unidos, entre otros.

Para inicios del 2016, 5 de los 6 puntos de la agenda se han concretado entre el gobierno y las FARC, aunque en muchos de los apartados se dejaron varios detalles sin resolver los cuales eran encomendados a una subcomisión que se encargaría de resolverlos paralelamente a las negociaciones principales (Serrano Monteavaro, 2014).

1.4. Posconflicto y Paz

El gobierno, a lo largo de todos estos años ha intentado por diversos medios alcanzar la paz tan anhelada para el país, sin embargo, el posconflicto puede ser abordado desde dos puntos de vista, el primero como lo consideran, Acevedo, Márquez y Rivera en *La empresa en el posconflicto: una visión desde la Teoría de la Gobernanza y la Responsabilidad Social Empresarial*, debe entenderse no solo como el periodo de tiempo en el que inician el cese de hostilidades entre las partes enfrentadas, sino como el propósito de construcción de paz y la recuperación de la sociedad del daño físico causado en el transcurso de la guerra. Por su parte, Ugarriza J. E. (2013) en *La dimensión política del postconflicto: discusiones conceptuales y avances empírico*, discurre que se puede hablar de posconflicto sin que haya una verdadera construcción de paz.

Al igual que Ugarriza, Tito Hernando Pérez Pérez (2011) considera en *Conflicto y postconflicto en Colombia: una mirada a la política de seguridad democrática*, que el posconflicto armado es el periodo que inicia desde el momento mismo en que los diálogos de concertación y negociación del conflicto armado interno adquieren un carácter de inalterabilidad, hasta cuando se llevan a cabo comicios sujetos a los distintos acuerdos y condiciones pactados en la

negociación. Más adelante, recalca que si en verdad se tiene la intención de dejar atrás la guerra debe de ser atacada a partir de las bases estructurales que la generaron como la pobreza, el desempleo, las inequidades socioeconómicas y, por supuesto, los déficits de democracia y garantía de los derechos humanos de todos los colombianos. Puesto que si se pretende buscar la reconciliación a partir de los actores armados y dejar a un lado a la sociedad civil que fue la afectada por los participantes de la guerra, difícilmente el país podrá lograr un escenario de paz.

Sin embargo, la problemática de la paz ha sido visualizada desde dos posturas, la primera considera que las condiciones de profundización y de degradación de la guerra posibilita la iniciación del proceso de diálogo y negociación. La segunda, sostiene que el estado de degradación de la guerra debido a complejos factores sociales, políticos y aún jurídicos, limitan la posibilidad de encontrar salidas políticas y negociadas al conflicto (Restrepo Riaza, 2011). Lamentablemente, lograr la paz en Colombia es un largo y tortuoso camino, debido a que muchas áreas de la sociedad no se ven afectadas directamente por el conflicto armado, ignorando los impactos que la guerra genera, como lo menciona Restrepo (2011)

“En Colombia es muy difícil el proceso de paz, ya que la guerra, al ocupar todos los espacios sociales y políticos, se convierte en la punta de lanza con la que hemos ahondado nuestras diferencias y, al mismo tiempo, a través de la cual hemos alcanzado una modernización limitada, dolorosa y desde luego con profundos vacíos y rupturas, debido a que esta visión de la guerra sigue siendo lejana, ajena a nosotros mismos: es como si la guerra fuera de los "otros".”

Debido a la poca credibilidad en el simbolismo de paz, las personas que realizan las acciones para lograrla tratan de evaluar mediante ciertos parámetros la efectividad de los procesos de construcción de paz. Primeramente, debe verificarse si existió una efectiva desmovilización y desarme de los bandos combatientes. Además, deberá evaluarse el desminado de territorios del conflicto. Sumado a esto, la reintegración de los azolados en armas a la sociedad y por último

el regreso y reincorporación de la población desarraigada, desplazada o refugiada (Pérez, 2011).

Para establecer un escenario de posconflicto favorable, Janiel David Melamed en su texto *Del conflicto al postconflicto en el contexto colombiano*, plantea que es necesario aprender de los acuerdos de paz anteriores, donde la desmovilización, el desarme y la reintegración a la sociedad civil sólo se logró en ciertas partes de las organizaciones ilegales, mientras que muchos de sus miembros continuaron con actividades delictivas.

Dado el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que como se mencionó anteriormente, la actividad ilegal del tráfico de drogas ha sido el combustible esencial para la financiación de sus estructuras militares, sería natural pensar que algunos de los miembros de las FARC que participan actualmente en este tipo de actividades prefieran continuar con esta actividad antes que desmovilizarse y someterse a los castigos por sus acciones, por lo que en la estructura de las FARC podría surgir una importante fragmentación de sus miembros (Melamed Visbal, 2014).

En cuanto a la reparación de víctimas, se puede decir que juega un papel fundamental dentro del posconflicto colombiano, y para que exista una reparación integral debe de existir una restitución que busque restablecer la situación previa de la víctima, esto incluye, el retorno a su lugar de residencia devolución de bienes y empleo, restablecimiento de derecho entre otras. Además, la víctima debe recibir una indemnización que se refiere a la compensación monetaria por los daños causados ya sean miedo, humillación, estrés, reputación etc. Sumado a esto, el individuo debe contar con un proceso de rehabilitación, en el cual debe recibir atención médica y psicológica, así como servicios sociales y legales. Asimismo, las medidas de satisfacción son parte fundamental en la reparación integral, ya que se refiere al conocimiento público de la verdad, restauración de derechos, sanciones contra perpetradores entre otras. Por último, debe existir una garantía de no repetición incluyendo el cese de las violaciones, reformas

institucionales y legales que promuevan cambios en los servicios de seguridad y promoción de los derechos humanos (Villa Gómez, 2013).

Empero, en Colombia la reparación de las víctimas se centró principalmente en la parte económica (Marín González, 2015) dejando a un lado los otros elementos para una reparación integral, pues aunque brinden un proceso de “rehabilitación” no es suficiente ya que como lo afirman, Moreno y Díaz (2016): “(...) el número de personas atendidas resulta más importante que el nivel de bienestar integral alcanzado con la atención”.

Por último, es claro que se avecinan grandes retos para la sociedad colombiana al culminarse la guerra y entrar en el proceso de posconflicto, pues son muchos los sectores que habría que cubrir para una verdadera paz.

De lograrse la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y los restantes actores armados ilegales vigentes en el conflicto armado, serios desafíos perdurarán antes de poder vivir en una sociedad que pueda reflejar los valores de un entorno de posconflicto. Para lograr estos objetivos fundamentales se requiere voluntad política de nuestros gobernantes, en aras de promover un verdadero desarrollo económico nacional, para combatir la corrupción, la exclusión política, la injustificada disparidad social y la pobreza, de tal forma que dichas problemáticas sean realmente tenidas en cuenta en el momento de diseñar las políticas públicas del Estado colombiano. Solo entonces el verdadero posconflicto encontrará las condiciones favorables para su consolidación en la sociedad colombiana. (Melamed Visbal, 2014)

1.5. Justicia Transicional

Uno de las mayores dificultades que enfrenta el Estado colombiano dentro del proceso de paz es la implementación de la justicia ante los hechos atroces que han realizado las fuerzas armadas en todos los años del conflicto, y como se mencionó anteriormente en caso tal que quedaran impunes los delitos cometidos la paz deseada difícilmente podría alcanzarse. Por tal motivo, el Estado ha intentado garantizarles a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y

la reparación integral a través de la denominada justicia transicional, este tipo de justicia alternativa se utiliza en contextos como el descrito anteriormente, en donde la cantidad de víctimas y hechos delictivos son tantos, que poderle dar solución a cada uno de ellos superaría los recursos humanos, técnicos y económicos con los que el Estado cuenta (Muñoz García, 2013).

De igual forma, Van Zyl (como se citó en Valdivieso Collazos, 2013) define que la justicia transicional debe entenderse como el esfuerzo por construir la paz sostenible tras un periodo de conflicto, violencia masiva o violación sistemática de los derechos humanos. El objetivo de la justicia transicional implica llevar a juicio a los perpetradores, revelar la verdad acerca de crímenes pasados, reparar a las víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la reconciliación.

Muchos autores tales como Rúa Delgado, Marín González, Valdivieso Collazos y Muñoz García, en sus diferentes trabajos de investigación se muestran a favor del proceso de justicia transicional que se intenta llevar a cabo en el territorio colombiano. Sin embargo, existen otros como Villa Gómez que consideran que la justicia transicional podría presentar fallas si los procesos de revelación de la verdad se concentran principalmente en el perpetrador y no en la víctima, pues se puede limitar la información, lo cual dificulta procesos de verdad generando la sensación de impunidad por lo que la reparación integral en las víctimas no se alcanzaría (Villa Gómez, 2013).

1.6. Contexto Histórico en el Valle del Cauca

El propósito de este proyecto se centra en la región del Valle del Cauca, y la ciudad de Santiago de Cali, por ello a continuación se abordará más en detalle la historia y las consecuencias del conflicto armado en esta zona. Para empezar, el departamento del Valle del Cauca se encuentra en el suroccidente del país, que lo componen 42 municipios. El Observatorio DD.HH. (Acosta Oidor, 2012) afirma que el conflicto armado se extendió a este territorio durante las últimas

décadas del siglo XX, con presencia de la guerrilla de las FARC con su Bloque Occidental, el ELN a través del Frente de Guerra Suroccidental, grupos paramilitares y narcotraficantes.

El establecimiento de las influencias de las FARC en este departamento fueron consecuencia de la zona de despeje del Caguán, y se asentaron especialmente en el corredor montañoso de la cordillera Central, en el Puerto de Buenaventura y en el sistema montañoso de los Farallones de Cali, los cuales se han constituido en un corredor estratégico de los actores armados. Por otro lado, el Cartel del Norte del Valle son señalados como los auspiciadores iniciales de los grupos paramilitares en este departamento, junto con empresarios y familiares de secuestrados. Por último, se cree que el recrudecimiento de la violencia en esta región al inicio del nuevo siglo fue consecuencia del secuestro masivo de feligreses en la iglesia La María de Cali en 1999, periodo previo a la primera incursión paramilitar en el centro del departamento (Acosta Oidor, 2012).

En esta región, la violencia se desarrolla por medio de masacres, secuestro y desplazamiento. Las masacres hacen referencia al asesinato de tres o más personas, en un mismo lugar por un mismo actor armado. Su objetivo es generar el pánico entre los vecinos o personas cercanas a las víctimas, para que con ello se desentivara la población a ir en contra de ellos (medida de control) o apoyar a otros bandos (Grupo de Memoria Histórica, 2013). Principalmente fueron los paramilitares los que utilizaban este medio para intimidar y golpear las redes de apoyo, de informantes, familiares y milicias de las guerrillas y ganar control del territorio, seguidos por los narcotraficantes, quienes la utilizaban como un medio de venganza, y por último con una representación menos significativa los grupos guerrilleros.

Las masacres se dieron en 16 de los 42 municipios del departamento siendo Buenaventura la localidad con mayor número de ellas (16 entre el 2000 y el 2010), seguidas de Cali, Buga, Jamundí, Tuluá y la región del Naya, en las que se registraron entre tres y cinco masacres. En la mayor parte de los municipios, las masacres eran ejecutadas generalmente por los

paramilitares excepto en Cali y el municipio de Yumbo, donde sus ejecutores principales eran los narcotraficantes (Acosta Oidor, 2012).

Los secuestros, se dieron principalmente durante la primera década del 2000 con una evidente disminución en la segunda mitad. Sus autores en el departamento por norma han sido los guerrilleros con mayor participación de las FARC, aunque cabe aclarar que la delincuencia común también participó significativamente en este delito (muchos de ellos incluso vendían sus secuestrados a las guerrillas después de no poder obtener recursos económicos de ellos por su cuenta). El narcotráfico tuvo muy poco que ver con este delito. Esta modalidad fue muy extendida geográficamente presentándose en 24 municipios del Valle, pero la mayoría no ocurrieron en áreas urbanas.

Por último, el desplazamiento se puede ver como una consecuencia de las tácticas de terror anteriores y tienen sus propios efectos. Se definen como migraciones que surgen como resultado del mismo temor al daño que pueda generarse para sus vidas y las de sus familias, pero no es un medio necesariamente planeado como estrategia por los actores armados. La mayor cantidad de desplazados ocurrieron en 1999 tras la emergencia de grupos paramilitares en el Valle del Cauca, y vuelve a ocurrir durante los años 2006 y 2008, cuando varios ex-miembros paramilitares se rearmaron y se reactiva las fuerzas guerrilleras, buscando el control de los territorios propios del antiguo accionar paramilitar. De esta forma se puede observar que a diferencia de las masacres, los enfrentamientos entre guerrillas y las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, aún son causales del desplazamiento. Adicionalmente, los datos afirman que los municipios de mayor recepción de desplazados son Cali (35.8%) y Jamundí (3,4%) (Acosta Oidor, 2012). La gran recepción de desplazamiento de Cali, se han ubicado generalmente en barrios de las zonas periféricas de la ciudad, donde se encuentran con niveles considerables de pobreza y violencia urbana, pandillas y pequeños comercios de drogas. También es preocupante el nivel de hacinamiento, la falta de una ocupación para generar ingresos y la gran población juvenil que difícilmente puede estudiar con regularidad, los cuales

son ingredientes a que se cree la violencia urbana. Cali ha sido centro de esta problemática con una tasa de 78 muertes por cada 100 mil habitantes, y tildada como una de las más inseguras del mundo según estudio realizado por la ONG mexicana Seguridad, Justicia y Paz (como lo cita en Acosta Oidor, C).

En resumen “El análisis sobre el panorama de las acciones violentas en contra la población civil pone en evidencia que las masacres y los desplazamientos forzados de la población están relacionados. El fenómeno del secuestro, por el contrario, ocurre de manera un poco más autónoma, aunque también es una estrategia delincencial que todos los actores armados ilegales utilizan” (Acosta Oidor, 2012). Además se destaca que las zonas más afectadas son básicamente Buenaventura y los municipios del norte del Valle que conducen hacia el Cañón de Garrapatas, zona de comercialización, procesamiento y comercialización de la cocaína.

Por último, para lograr una disminución en la violencia en este departamento, el Gobierno ha intentado varios caminos. A partir del año 2002, el Gobierno nacional comienza el proceso de desmovilización de los paramilitares, y permitió que en el Valle del Cauca se desmovilizaran 564 miembros del bloque Calima. Sin embargo, este desarme no fue del todo efectivo porque como lo afirma Acosta Oidor, muchos de los desmovilizados fueron contratados por los narcotraficantes y de esta forma surgieron dos grupos de seguridad a su servicio: “Los Rastrojos” y “Los Machos”. Además, el proceso de Justicia y Paz en este departamento ha sido un poco más lento que en otras regiones del país, debido a que muy pocos paramilitares desmovilizados fueron postulados al proceso de Justicia y Paz.

Otros ejemplos de buenas prácticas para superar el conflicto en el Valle del Cauca los presenta Barón Porras en su documento. Para este autor, el éxito de los casos que estudia recae en dos aspectos. Por un lado, se debe lograr la creación de espacios de reconocimiento del otro en su condición, en haber abierto las puertas de la inclusión política y social a poblaciones marginadas y/o estigmatizadas. En otras palabras la inclusión social, política, simbólica y

cultural constituye una de las claves más importantes para superar el conflicto armado en el país. (Barón Porras, 2004)

1.7. El Sector Empresarial en el Posconflicto

La paz duradera en Colombia necesita no solo de la participación del Estado, sino de muchos otros actores de la sociedad, como lo es el sector privado, ya que como lo asegura Acevedo et al. (Acevedo Prada, Márquez Gómez, & Rivera Barrera, n.d.) “La Paz, es el llamado que le hace la sociedad actual, el contexto colombiano y la Constitución de 1991 a la empresa, porque lo necesita y lo reconoce como actor capaz de colaborar con la consecución de las condiciones, que una vez terminado el conflicto bélico, ayude al país a mantener una estabilidad y una paz perdurable”

Del mismo modo, otros autores también mencionan que la empresa privada debe ser la piedra angular del posconflicto para tener una paz sostenible a través del tiempo en la sociedad colombiana como lo menciona Álvarez (2016), “La empresa al tener la capacidad de generar desarrollo y crecimiento económico en contextos de reconstrucción posconflicto mediante la creación de empleo, siendo esto de gran importancia para el asentamiento de la paz y la sustitución de la economía ilegal predominante durante la guerra” (p.11).

Pues es por medio de la creación de nuevos empleos y el apoyo privado que las personas se sentirán incentivadas a dejar las armas y obtener un mejor futuro, y por medio de política de Responsabilidad Social Empresarial se contribuye a la reconstrucción del tejido social, por medio de procesos sociales de perdón, reconciliación y consolidación de la sociedad civil en la que desarrollan su actividad empresarial los cuales funden condiciones para construir lazos institucionales y sociales necesarios para la construcción de paz. Acevedo et al. (Acevedo Prada et al., n.d.).

1.8. Variables Económicas Presentes en el Proceso de Paz

Gran desafío es para todos los colombianos el proceso de paz que actualmente se gesta en la Habana, Cuba. Desde el punto de vista económico, hay varios expertos, como el ministro de

Hacienda, Mauricio Cárdenas, el cual considera que el posconflicto es una inversión necesaria para la sociedad colombiana, esta inversión se pagará sola a largo plazo, debido al mayor crecimiento que presentará la economía en condiciones de paz. (El Espectador, 2015). Este crecimiento en la economía, puede ser explicado debido a los gastos asociados a la guerra colombiana representa costos hasta del 4% del PIB. (Guerra & Plata, 2005) ya que existen pérdidas de diferente índoles desde el capital físico hasta el capital humano que cada año tiene pérdidas significativas debido a la falta de paz en el país.

Cabe resaltar, que aunque no se profundizará en este trabajo de investigación cada uno de los beneficios económicos que generaría la paz en Colombia (CERAC - UNDP, 2014), vale la pena mencionar que en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) junto con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), afirman que Colombia recibirá grandes aportes en términos económicos y se ven materializados en las siguientes proposiciones:

Se acelerará la economía nacional, aumentará el ingreso nacional y el ingreso promedio por habitante, mejorará la distribución del ingreso y de la propiedad de la tierra, se incorporará los recursos desaprovechados a la economía, mejorará el sistema financiero, habrá mayor percepción de los mercados financieros sobre Colombia, reducirá el costo de la deuda privada y pública, se tendrá un aceleramiento en la reducción de la pobreza y aumentará la calidad de vida, debido a la eliminación de la violencia del conflicto incrementará la seguridad ciudadana, los costos directos que impone el conflicto en materia de seguridad y destrucción de infraestructura desaparecerán, se frenará la fuga de cerebros, la cual está muy relacionada con el conflicto, existirá una mayor inversión extranjera, entre otros beneficios que acarrea las negociaciones de paz.

2. METODOLOGÍA

Ahora bien, después de definir claramente el objetivo de esta investigación, el cual es en general plantear si Cali está preparada para enfrentar al posconflicto, se continuará con la

determinación del diseño apropiado de la investigación para reunir datos durante el trabajo de campo.

Puesto que el posconflicto es un tema polémico que se está desarrollando actualmente, este estudio realizará una investigación cualitativa, método de investigación que se basa en la recolección de datos en forma de texto o de imágenes con preguntas abiertas, observación o datos hallados (Hair, Bush, & Ortinau, 2010), con la cual se buscará una posición informada sobre la posición de Cali para enfrentar este proceso.

La investigación cualitativa constará de entrevistas a expertos, la cual es una técnica de indagación en persona para reunir opiniones de individuos considerados conocedoras del problema de investigación o que son líderes en sus áreas y que pueden o tienen un papel activo en este tema. Líderes políticos, empresariales, religiosos, educativos, entre otros, que nos darán una perspectiva más amplia de la situación actual de Cali. En el sector político, el Secretario de Paz de la Gobernación del Valle Fabio Ariel Cardozo Montealegre; en el área académica, la doctora Lucia Manfredi docente de la Universidad Icesi; también tanto en el área académica como en el sector político se encuentra Juan Pablo Ortega, estudiante de la Universidad Javeriana de Cali y edil de la comuna 22; como líderes religiosos, se entrevistará al Pastor Jhon Milton Rodríguez, líder de la iglesia más grande de Cali, y a el Padre William Bustamante, uno de los sacerdotes principales de la Iglesia del Templo en Cali; y por último en el área empresarial se contactará con Juan Felipe Restrepo, empresario del Valle del Cauca, fundador de varias compañías entre ellas la cadena del Sr. Wok.

3. RESULTADOS

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos al analizar y empalmar las respuestas de los entrevistados.

3.1. Opinión sobre el posconflicto

Para poder analizar las perspectivas de los líderes caleños, es necesario tener en cuenta su posición frente al proceso de paz, por tal motivo dentro de este bloque se desarrollará el proceso

de negociación y las principales ideas sobre este proceso que se vive actualmente en la ciudad de Cali, en el cual los líderes de la sociedad juegan un papel importante frente a la postura que tengan respecto al tema.

En primer lugar se aborda la postura de la profesora de la Universidad Icesi, Luciana Manfredi, la cual define que la estrategia de negociación, consiste en tres etapas la pre-negociación, la negociación y la post-negociación. Y resalta que de tal forma el proceso de paz fue planeado, mediante un estudio exploratorio y de factibilidad que inició en febrero del año 2012 y culminó en agosto de ese mismo año, esa primera parte fue privada en donde solamente intervinieron el gobierno y sus asesores para planear todo el proceso de paz. La segunda etapa, fue pública, la cual comenzó en agosto del 2012 y terminó en agosto de 2016. Esta larga etapa de negociación en la Habana, contó con la participaron de diez personas del gobierno, diez personas de las FARC, dos observadores y dos veedores de diferentes países. Los observadores y los veedores fueron escogidos por el Gobierno y las FARC, por su parte el gobierno escogió a Chile y Noruega, mientras que las Farc optaron por Venezuela y Cuba. Con la finalización de esta segunda fase se inicia la tercera, el posacuerdo o “posconflicto”.

Este proceso de negociación es considerado por todos los entrevistados como el mejor método para terminar el conflicto armado en la sociedad colombiana. Manfredi declara que cuando empezó el proceso de paz, en el análisis de factibilidad se analizaron 254 conflictos internos en el mundo, de esos 254 conflictos el 50% sigue como un conflicto armado, el otro 50% se terminó. De este 50% que se terminó, el 10% se terminó por la fuerza y con la guerra, y el otro 40% de forma negociada. Sin embargo, para que ocurra un proceso de paz tuvo que existir conflictos anteriores, que ninguno de los dos actores pudo vencer a su oponente. Por ejemplo, la estrategia del gobierno de Pastrana, fue la de construir un proceso de paz, pero no resultó. La estrategia del gobierno de Álvaro Uribe fue atacar y tratar de destruir a la guerrilla por medio de la fuerza, a través del Plan Patriota y la Política de la Seguridad Democrática, y no dio resultados en el sentido que no acabó con la guerrilla y si los colombianos le dimos la

oportunidad a ese plan, también se le tiene que dar la oportunidad al proceso de paz mediante la negociación.

Algo que se debe resaltar, es que durante el gobierno de Álvaro Uribe hubo cosas positivas, puesto que en los ocho años de su gobierno lograron mermarle el poder tan grande que tenía la guerrilla. Desde ese punto de vista, si hoy la guerrilla se sienta a negociar, fue porque ha perdido la legitimidad política y fuentes de financiamiento que necesitaba para sostener esa guerra.

El posconflicto, según Mauricio Ríos, representa un reto muy grande para el país, haciendo referencia a que el país no es sólo el Estado colombiano y el Gobierno Nacional como la cabeza de ese Estado, sino para la sociedad colombiana en general. Ya que el acuerdo, sin duda alguna, traerá cambios estructurales en el Estado Colombiano que afectarán, para bien o para mal, el futuro de nuestro país. Por eso, el posacuerdo, implicaría que toda la sociedad esté preparada para afrontarlo. Y si se maneja correctamente, entraríamos en una etapa del posconflicto. Puesto que el acuerdo como tal, la firma del acuerdo, no garantiza que se supere las causas del conflicto y por ende no garantiza que se supere el conflicto.

Sumado a esto, Cardozo, afirma que el proceso de posconflicto son una serie de medidas de decisiones que se establecen, se proyectan, perfilan y se implementan con el propósito de evitar que una situación de anormalidad de guerra y de conflicto se repita. Esta etapa de posconflicto es la suturación de ese proceso que abrió heridas, que generó entropías, dificultades, atrasos, que generó toda una estela de dolor y de violencia. Este proceso, es necesario que genere condiciones de no repetición, condiciones de estabilidad política en el país, condiciones de apertura política para que no se recurra a las armas por asfixia democrática y dificultades en el marco de la política colombiana.

Esta serie de decisiones tienen que impactar en la política, en la cultura misma del pueblo colombiano, que genere cambios en la economía, en la irrigación de los recursos nacionales, que existan políticas para disminuir la inequidad, para generar mayor justicia, mayor

educación, mayor apertura política. Este nuevo concepto para nuestra historia, intenta que se deje atrás, y para siempre, la dinámica de la violencia en Colombia que parece una dinámica inveterada que ha sido el alma de nuestra historia.

Juan Pablo Ortega afirma que para que pueda surgir el posconflicto se existen cinco retos importantes. El primero de ellos es la capacitación ya que muchos de los reinsertados serán personas que se han dedicado toda su vida a delinquir, por tal motivo hay que enseñarles que existen otros medios para salir adelante. El segundo punto, es que los reinsertados deben sentir que el Estado los está recibiendo con nuevas oportunidades para ellos. Por tal motivo, la participación política es innegable para ellos, ya que desde sus inicios una parte fundamental para el comienzo de esta guerra fue por conflictos políticos en el cual no se les permitía ninguna participación. En ese sentido, las curules del Congreso de la República brindadas por el gobierno que se pactaron en el acuerdo de paz son sumamente importantes para ese proceso de posconflicto. Sumado a esto, su partido político no deberá estar estigmatizado, puesto que la sociedad podría considerarlos como una amenaza a la estabilidad económica del país porque en Colombia, desde tiempo inmemoriales, se ha discriminado negativamente toda tendencia de izquierda y todo aquello que provenga de ella es considerada como “mala” al ser socialista o comunista.

El tercer punto es tratar a todos los reinsertados como víctimas, ya que en la mayoría de las veces cuando un guerrillero se desmovilizan se trata como victimario, como un terrorista, un criminal que dejó las armas y ahora tiene que someterse a todo aquello a lo que la sociedad le demande. Por el contrario, en esta nueva etapa de posconflicto se debe hacer un proceso de reparación psicosocial de estas personas, al hacerle entender a los desmovilizados que “cuando mataron a una persona no sólo le hicieron daño a la familia de esa persona, sino que también se hicieron daño a ellos mismos”. De esta forma se garantiza que desde su propia voluntad tengan un proceso, con ayuda del Estado, de reincorporarse y de reflexionar de esa vida pasada que deben dejar y de la vida futura que deben empezar a vivir.

El cuarto punto para que funcione un posconflicto son los subsidios, mientras se reincorporan a la vida civil los desmovilizados se les debe brindar un aporte económico, porque los 7 procesos de paz anteriores del 89 al 99 se les dieron subsidios, por lo tanto con las Farc y el ELN no puede ser diferente. Además, Juan Pablo afirma que se les debe garantizar este tipo de subsidios para evitar que lleguen a otros grupos armados, porque según inteligencia militar a cada guerrillero de las FARC, se le dan \$2.000.000 mensuales aproximadamente. Por tal motivo, “si a una persona que está en el monte, la cual nunca ha tenido cobertura del Estado, le quitamos el arma y lo dejamos en la calle, lo más probable es que recurra a la delincuencia común, que podría terminar como un desplazado, entre otras cosas”. Por lo cual los subsidios económicos a estas personas son fundamentales mientras hacen el tránsito a la vida civil.

El quinto punto en el posconflicto es la identificación, que no consiste en sólo darles cédula, sino borrarles (mediante un proceso de justicia transicional) el historial criminal, porque de no hacerse así, les sería imposible reinsertarse a la vida civil. Borrarle su historia criminal es tratar de no estigmatizar a la personas, puesto que la población civil estaría siempre alerta frente a la persona. Es por eso que darles identificación es proporcionarle la opción a los reinsertados para que vuelvan realmente a ser ciudadanos colombianos. “Que en el momento en el cual estas personas lleguen a las empresas, tengan la oportunidad de participar como cualquier otro, es decir, que tengan la oportunidad de ser otro colombiano más, y que ese pasado se borre, que se aprenda de él, pero que sigamos adelante.”

3.2. Político

Este segmento se dividirá en dos partes. La primera de ellas es la percepción de los principales líderes respecto a la posibilidad de la participación política de las Farc en el posconflicto. La segunda, tratará de lo que conocen los entrevistados sobre las acciones que el Estado está realizando para la preparación de una situación de posconflicto en Colombia.

Antes de exponer este resultado, cabe aclarar dos aspectos: el primero es que, cómo el director de redacción del Diario de Occidente afirmó, cualquier predicción que se realiza en la política

está expuesta a cometer equivocaciones, pues “este país es impredecible políticamente”; y el segundo, debido a que esta investigación no tratará los términos legales en los cuales ellos podrán o no podrán ejercer política, o las condiciones en las que se realizarán, las siguientes afirmaciones se basan en la suposición de un posible acuerdo de paz que permita la participación política de los miembros de los grupos al margen de la ley.

Las entrevistas en general dieron un plano general sobre lo que estos líderes han percibido, o han investigado, sobre la posibilidad de que los grupos guerrilleros desmovilizado puedan llegar a ocupar cargos políticos. Esto se debe principalmente a la poca popularidad y apoyo nacional que presentan los miembros de estas organizaciones, como lo anunció Juan Pablo Ortega, pues en las encuestas aparecen que antes del proceso de paz, el 98% de los colombianos “detestaban las Farc” y 6 años después, en el 2016 el 90% de la población no había cambiado de opinión. Mientras tanto, Mauricio Ríos Díaz confirma esta idea con los informes del Dane en los cuales las Farc no bajan del 90% de desaprobación y continúa afirmando que debido a la historia que ha presentado la izquierda en el país, no se ven claros indicios de que puedan llegar al poder dentro de pocos años. Aunque, existen diferencias ideológicas entre la izquierda armada y la izquierda democrática, la larga duración de las guerrillas y su baja popularidad ha afectado incluso a la imagen de este sector político en Colombia. No obstante, la izquierda si ha logrado cargos públicos, pero muchos de ellos no han presentado un percepción positiva en el plano general, como sucedió con la alcaldía de Bogotá con Gustavo Petro. La Dr. Manfredi afirma que una vez algunos de estos grupos armados se desmovilicen, los partidos políticos que formarían serían de izquierda, y debido a que el espectro ideológico de Colombia tiende a la derecha, es difícil que logren la cantidad de votos necesarios para ejercer cargos en las grandes ciudades, departamentos o cargos nacionales puesto que, adicionalmente, competirían por los electores contra otros partidos de izquierda como El Polo y a al final se quitarán votos entre ellos. Además, otro argumento que sustenta la idea de que la sociedad colombiana no está

preparada para elegir a un líder de izquierda puede ser la interpretación del triunfo del “No” en el plebiscito del 2 de octubre.

Sin embargo, en el largo plazo las condiciones pueden cambiar. Se debe incluir la variabilidad de las opiniones públicas al largo plazo al tiempo de la posibilidad que exista un factor positivo en la campaña política de algún miembro de estas organizaciones que lo vuelvan candidato posible del cargo: ya sea un líder carismático (que según las entrevistas, todavía no se ha presentado) o que este grupo sea capaz de “leer”, comprender y adaptarse a la población colombiana y lo que quieren.

Por otro lado, la mayoría de los entrevistados afirmaron que sí era posible que estos agentes puedan llegar a ejercer cargos públicos por elección popular en ciertas municipalidades. Juan Pablo Ortega hace alusión a la poca o nula presencia del Estado en algunas áreas más periféricas del país para explicar dicho fenómeno. Debido a esta falencia, los grupos guerrilleros aprovecharon esta situación de falta de soberanía del Gobierno colombiano en estas poblaciones y llegaron a realizar la función de Estado en muchas ocasiones en estas comunidades e incluso elaborado obras públicas. En este aspecto se debe recordar la diferencia de la forma de accionar del paramilitarismo, el cual usa el miedo y el arrasamiento de las poblaciones, y las guerrillas, las cuales, aunque también combinaron todas formas de lucha (narcotráfico, extorsión, la tortura, el homicidio, la violación, el reclutamiento de menores, crímenes de lesa humanidad que hay que coordinar), su principal enemigo no era la población local a la cual a veces servían. También se debe tener en cuenta que una organización como lo es las Farc, representaba para el 2016 el segundo empleador del campo colombiano, con más de 35.000 familias cocaleras. Por esta razón, al ser estos grupos al margen de la ley el único poder que conocen, un poder de facto, son más reconocidas por estas personas que el Estado legal colombiano que no han estado tan presente en sus vidas. Ortega comenta un testimonio de un indígena del Cauca que se muestra con temor de la posible desmovilización de las Farc, pues afirma que existe un “ejército asesino” que en cuanto la guerrilla ya no esté, los podrían

atacar. Es debido a esta figura de haber representado un Estado para ciertas comunidades, lo que les permitiría darle cierta favorabilidad en posibles elecciones en el corto o mediano plazo en estas localidades, en donde, como lo afirma Manfredi, los reconocen y los quieren. No obstante, existe una dificultad de lograrlo en el corto plazo, debido a que las próximas elecciones locales y regionales se realizarán dentro de tres años y las condiciones para su desmovilización junto a su participación política no están determinadas aún, lo cual podría dejarles un periodo de tiempo muy corto para su organización.

La segunda parte de este análisis de este segmento trata de las políticas y programas que el Estado esté desarrollando para la preparación de un futuro posconflicto, que los líderes conocen o realizan en la actualidad. Una observación general por parte de varios entrevistado fue el desconocimiento de cuáles son las acciones que el Gobierno, sobre todo del Valle del Cauca y Cali, están realizando en este aspecto. Juan Pablo Ortega afirma que el ex-alcalde de Cali Rodrigo Guerrero, no presentaba un plan preparado para el posconflicto, pero el actual alcalde Maurice Armitage con el cual ha podido discutir, tiene la visión de realizar estas políticas relacionadas con el posconflicto desde la inversión social. Su base de trabajo es el Plan de Desarrollo Municipal, en el cual vale la pena mencionar se encuentra dicho “tanto el país y en este caso la ciudad de Cali se debe preparar para las nuevas situaciones de conflicto. La afectación de la ciudad se da en doble vía: por un lado acoge población víctima de dichas dinámicas y de otro lado la violencia que generan las pugnas por el control y regulación de negocios ilegales, generando alto número de homicidios, amenazas, desplazamientos intraurbanos, reclutamiento forzado de menores” (Gabinete Municipal Santiago de Cali, 2016). Por este motivo, se presenta dentro de este plan un segmento de Seguridad y Cultura ciudadana, donde se encuentran un componente de Posconflicto, paz, reconciliación y Derechos Humanos junto a la Atención Integral a las Víctimas.

Sin embargo, aunque este plan de desarrollo fue publicado en Febrero del 2016, para el momento de la entrevistas, la mayoría de los líderes presentaron desconocimiento de las

acciones que el gobierno local podría estar realizando para la preparación de un posconflicto. Aunque, por un lado Luciana Manfredi reconoció ciertas alianzas público-privadas para financiar la capacitación de los reinsertados y el periodista Ríos mencionó los Gestores de Movilidad (programa que presenta un porcentaje de personas reinsertadas), por el otro lado, el Cura William comenta que algunas ONG's internacionales han sido las instituciones que los han acompañado a las comunidades donde ellos brindan apoyo, y Juan Pablo Ortega opina que no son tan fuertes los planes de contingencia que presenta la alcaldía. Él realiza una comparación entre Cali y Medellín con el programa que realizó esta segunda ciudad llamado "Preparémonos para la Paz" para la desmovilización de las milicias urbanas en los 90 y afirma que Cali, al no tener la misma presencia de milicias y guerrillas en su interior, no ha visto la necesidad de prepararse para afrontar las necesidades que podrían surgir en un posconflicto. Estos dos puntos de vista encontrados se pueden explicar de una mejor manera citando las acciones el Secretario de Paz y Reconciliación del Valle del Cauca comentó en su entrevista. En ella, él presenta el Pilar de Paz Territorial el cual presenta sus cuatro componentes: el económico, el fortalecimiento institucional, la incentivación al liderazgo local y la justicia. Por medio del programa piloto en los 10 municipios más afectados por la violencia en el Valle, espera poder desarrollar un contexto de restauración y paz que podrá ser replicado en más de 23 departamentos. No obstante, Cardozo comenta que aunque se están realizando estos esfuerzos, lo que se espera es que planeación nacional presenten directrices a las gobernaciones y alcaldías una vez se logre un acuerdo para un posconflicto, para que de esta forma ellos puedan planear con perspectiva a la paz territorial. En otras palabras, mientras la alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle tienen dentro de sus Planes de Desarrollo un componente específico para la Paz (los cuales según la normativa colombiana deben estar respaldados por recursos y controlados por los resultados que se obtendrán), en el plano nacional no se están realizando esfuerzos en conjunto con el Estado local para lograr una planificación unificada. Al contrario, cada gobierno está "haciendo la tarea" por su parte (como lo afirma Cardozo) lo

cual puede aportar en la construcción de la sociedad, pero podría presentar mejores condiciones a las encontradas en este momento.

Mauricio Ríos también afirma que desde los medio de comunicación no se percibe que se haya estructurado todo el Estado desde el municipio, el departamento y la nación (en la cabeza) para incorporar a todos los desmovilizados que podrán llegar. Una vez se logre un acuerdo, se presentará un tiempo de entrega de las armas y posteriormente la desmovilización en la cual se tendrán que poner en marcha todas las acciones que habrían de encargarse de la incorporación. Sin embargo a Ríos le parece que la falta de planeación en conjunto y la falta de apoyos económicos, significarán que estos esfuerzos no lograrán ser suficientes para lo que se necesitará.

En resumen, los líderes concuerdan en que la sociedad colombiana no está preparada en general, en el corto o el mediano plazo, para elegir en la política nacional alguno de los posibles miembros de los grupos que dejarán las armas, debido a su poca favorabilidad política. Sin embargo, en situaciones específicas y sobre todo en algunas localidades, puede ser que en los próximos años ejerzan un cargo público, pues se han convertido en las personas que ejercen el poder de facto en estas regiones. Por otro lado, aunque el Gobierno sí presenta planes estructurados y documentados, la falta de conocimiento de la sociedad de dichas acciones y una cierta actitud de espera de directrices nacionales, preocupan sobre la realidad de ellas en un corto plazo. Sin embargo, en un posible posconflicto se espera que la política cambie la prioridad de su agenda pública que ha tenido en los últimos 50 años que ha sido la lucha armada, para de esta forma enfocarse en solucionar otras problemáticas de Colombia.

3.3. Económico

Desde el punto de vista económico, la mayoría de los entrevistados aseguran que Colombia tendrá un crecimiento económico al terminar el conflicto. Sin embargo esto es cuestión de tiempo ya que en el corto plazo, hay repercusiones y externalidades negativas, tal y como lo asegura la profesora Manfredi puesto que habrá un fuerte golpe debido a que la guerrilla se

comprometió a dejar de dedicarse al narcotráfico, esta actividad ilegal es una fuente de ingresos muy importante para Colombia, aunque no se vea reflejado en el PIB, se refleja en el modo de vida de las personas, en las cuales repercutirá negativamente en un principio.

El periodista Ríos afirma que en el mediano plazo al trasladar esos cultivos a cultivos lícitos probablemente Colombia pueda crecer en gran manera. Además, aumentará la confianza de inversionistas y es probable que muchos inversores internacionales decidan invertir en Colombia, y de esta forma generar más empleo. Por otra parte, afirma que deberá existir un beneficio económico en la industria en un futuro, puesto que el presupuesto que el Estado destina para la guerra podría ser utilizado para sustentar la educación de miles de colombianos que en el futuro traerá un capital humano más especializado con capacidad de crear nueva industria y nuevas oportunidades laborales.

Por su parte, los empresarios se encuentran muy divididos en sus opiniones respecto al posconflicto, existen algunos que apoyan y otros que rechazan la idea. Ya que se sienten inseguros de tener trabajadores dentro de sus organizaciones que estaban acostumbrados a delinquir, y no podrían permitir que estas personas fueran parte de sus organizaciones por miedo al robo, secuestro, extorsión, entre otras actividades criminales.

3.4. Sociedad

Los resultados encontrados en la sociedad colombiana están presentes en cada uno de los aspectos analizados previamente. En general, la principal consecuencia social del posconflicto es la desmovilización de los ex-miembros de los grupos armados al margen de la ley que deben ser reinsertados al sistema. De lo contrario, si dejan de estar en el monte armado, cometiendo delitos y vuelven a la ciudad pero el sistema no los recoge, empezarán a encontrar incentivos para unirse en grupos armados ilegales que ya no son guerrillas sino que son guerrillas urbanas, como por ejemplo las Bacrim, y por ende se podría disparar la delincuencia en las urbes. Por ello deben ser reinsertados y esto hace parte del plan Estado para este proceso. La sociedad caleña y del Valle presentan preocupaciones particulares ya que, debido a ser un departamento

central geográficamente a varias zonas de conflicto (que además es climáticamente amable), es uno de los departamentos que mayor desplazados recibe del conflicto interno. En resumen, se presentará en un futuro posconflicto un gran desafío social en la ciudad por cuestiones de seguridad, temas de inclusión de los desmovilizados, generación de empleo y asimilación.

Sin embargo, existen otros dos puntos que las entrevistas dieron a conocer respecto a la posición de la sociedad respecto a un futuro y posible posconflicto. En primer lugar está la posición de la sociedad, sobre todo la urbana, respecto a un conflicto armado que sucede en las zonas periféricas del país. Por un lado, algunas personas, como el Edil de la comuna 22, opinan que ciudades principales como Cali, han sido afectadas directamente por el enfrentamiento entre las guerrillas, no sólo por los golpes de opinión propiciados dentro de su territorio, sino por los desplazados y migraciones descontroladas que ha sufrido esta ciudad durante estas décadas. Estos hechos afectaron a la sociedad que no estaba preparada para suplir las necesidades de estas poblaciones, e incrementaron las brechas de desigualdad, pobreza e inseguridad. Por otro lado, otras opiniones reveladas en la entrevistas, piensan que la población de las ciudades han observado más al conflicto por la televisión, que de verdad estar directamente afectado por ella. Adicionalmente, esta opinión se ve reflejada en la diferencia en los resultados del plebiscito en el cual se vio una polarización entre la zona “centro” del país y su “periferia”. No obstante, la mayoría de los líderes ven los problemas actuales de la ciudad descritos al inicio de esta sección, como consecuencias del conflicto armado, aunque puede inferirse que las ciudades pueden encontrarse sesgadas en su juicio sobre el tema.

En segundo lugar, se encuentra la consecuencia en los comportamientos causados por la guerra. En las entrevistas se propone la premisa que la larga prolongación en el tiempo, sus consecuencias en el general de la población, y la trayectoria de la senda histórica de los diferentes conflictos en Colombia, han provocado que la sociedad colombiana tramiten sus conflictos de forma violenta. Violencia que no puede estar justificada en la pobreza, pues Ortega comenta que existen otros países que llegan a ser más pobres, pero no son violentos.

Esta afirmación da a entender que dentro de la cultura colombiana (se habla de forma general y no específicamente de cada ciudadano) cuando existe una diferencia de opinión se recurre a la violencia, lo cual se evidencia desde el inicio de esta guerra interna o incluso previo a ella. Debido a la prolongación y permanencia de este conflicto, no se ha logrado la disminución a estas dinámicas, sino que por lo contrario lo pueden consolidar. Es en medio de este contexto impetuoso que el posconflicto surgía como una posibilidad para cambiar dichas dinámicas, al enseñar y ser de ejemplo para la población, que existen otras formas diferentes a las vías de hechos armados para la resolución de las diferencias.

4. CONCLUSIONES

Del trabajo de investigación y el análisis de los resultados de las entrevistas se concluye que la ciudad de Cali no está preparada satisfactoriamente para un posible posconflicto.

En la parte social se observó que la sociedad no se encuentra preparada puesto que en el plebiscito del 2 de octubre del 2016, la mayor parte de la población se mostró indiferente al decidir no votar en las elecciones. Manfredi afirma que cuando las personas se muestran indiferentes ante las elecciones demuestra que las personas están cansadas de la élite o la política que los rodea. Sin embargo, este tema debe ser un asunto de todos los colombianos y no de unos cuantos.

Además, se espera que el gobierno implemente políticas que incentiven a los empresarios y que se les garantice la protección por parte del Estado. Ya que este sector será el que jalone a la economía por medio del empleo para reinsertar a la población desmovilizada.

En cuanto a lo político, se concluye que los esfuerzos que están realizando la Alcaldía y la Gobernación en la actualidad no son suficientes para los cambios y consecuencias que podrán resultar de una situación de posconflicto. La falta de conocimiento por parte de los diferentes líderes abren dudas sobre la efectividad y realización de las actividades que se presentan dentro del Plan de Desarrollo. Adicionalmente, se recomienda que el Gobierno Nacional brinde mayor apoyo a las entidades locales para lograr un programa de preparación unificado para que de

esta forma, las acciones que cada institución está llevando a cabo por su parte se vea respaldado por una planeación nacional.

Por último se recomienda volver a retomar los factores estructurales que han constituido la base del conflicto armado. Las acciones que se realizarán por parte del Estado deben tener en cuenta las condiciones de esclarecimiento de la verdad, el problema de la propiedad de la tierra en Colombia, el olvido de las zonas rurales, la falta de poder Estatal en todo el territorio nacional, las oportunidades de desarrollo del campo y la imposibilidad de la participación política de los sectores que fueron apartados durante la historia del país.

BIBLIOGRAFÍA

Acevedo Prada, R. D., Márquez Gómez, L. C., & Rivera Barrera, Á. V. (n.d.). LA EMPRESA EN EL POSCONFLICTO: una visión desde la Teoría de la Gobernanza y la Responsabilidad Social Empresarial, 1–6.

Acosta Oidor, C. (2012). Anatomía del conflicto armado en el Valle del Cauca durante la primera década del siglo XXI. *Guillermo de Ockham. Revista Científica*, 10(1), 83–99. Retrieved from <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4013871.pdf>

Álvarez Riascos, K. T. (2016). Desarrollo local como herramienta de postconflicto en Colombia. *GeoGraphos. Revista Digital Para Estudiantes de Geografía Y Ciencias Sociales*, 7(10), 1–35. <http://doi.org/10.14198/GEOGRA2016.7.82>

Barón Porras, L. F. (2004). Estudios de caso sobre buenas prácticas para superar el conflicto en el Valle del Cauca.

CERAC - UNDP. (2014). ¿Qué ganará Colombia con la paz? *Undp*, 1–15. Retrieved from <http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/Paz/undp-co-ganapaz-2014.pdf>

Gabinete Municipal Santiago de Cali. (2016). *Plan de Desarrollo Municipio Santiago de Cali 2016-2019*. Cali.

Grupo de Memoria Histórica. (2013). *¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*. (Imprenta Nacional, Ed.). Bogotá.

- Guerra, M. del R., & Plata, J. J. (2005). ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE CONFLICTO, POSCONFLICTO, RECONCILIACIÓN Y PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN COLOMBIA, (21), 81–92.
- Kalmanovitz, S. (2015). *ECONOMÍA Y NACIÓN una breve historia de Colombia. PhD Proposal* (Vol. 1). <http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Marín González, K. (2015). Entre Vecinos: Retos De La Justicia Transicional a Nivel Local. El Caso De La Sierra De La Macarena, Colombia. *Between Neighbors: Challenges in the Local Transitional Justice. the Case of the “La Sierra De La Macarena,” Colombia.*, 15(2), 479–494. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=108779066&lang=es&site=ehost-live>
- Melamed Visbal, J. D. (2014). Del conflicto al posconflicto en el contexto colombiano. *Revista Universidad de La Salle*, (63), 57–73. Retrieved from <http://revistas.lasalle.edu.co/index.php/ls/article/view/2970>
- Molano Bravo A. (2014). Asalto a Marquetalia. Recuperado en: <http://www.elespectador.com/noticias/nacional/asalto-marquetalia-articulo-498380>
- Moreno Camacho, M. A., & Díaz Rico, M. E. (2016). Posturas en la atención psicosocial a víctimas del conflicto armado, (1), 193–214.
- Muñoz García, C. Y. (2013). REFLEXIONES SOBRE TRANSICIONAL EN COLOMBIA : TENSIONES ENTRE LA JUSTICIA Y LA PAZ, 10, 61–86.
- Pérez, T. H. P. (2011). Conflicto y posconflicto en Colombia: una mirada a la política de seguridad democrática. *Magistro*, 5, 129 – 150. Retrieved from <http://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/magistro/article/view/553>
- Pizarro Leongómes, E. (2004). Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia. Bogotá: Norma.
- Restrepo Riaza, W. (2011). Conflicto armado y alternativas de paz, 111–125.

- Sandoval Forero, E. A. (2013). Ways for peace in Colombia. *Ra Ximhai: Revista Científica de Sociedad, Cultura Y Desarrollo Sostenible*, 9(2), 105–129. Retrieved from <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4731764&info=resumen&idioma=ENG>
- Serrano Monteavaro, M. Á. (2013). *El proceso de paz en Colombia*.
- Takeuchi, L. K. R. (2009). Los municipios colombianos y el conflicto armado Una mirada a los efectos sobre la efectividad en el desempeño de los gobiernos locales. *The Colombian Municipalities and Armed Conflict A Look at the Consequences on the Effectiveness of the Performance of Local Governments*, (70), 93–120. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=48476948&lang=es&site=ehost-live>
- Ugarriza, J. E. (2013). La dimension política del postconflicto: discusiones conceptuales y avances empiricos. *Colombia Internacional* 77, 141–176.
- Valdivieso Collazos, A. M. (2013). Los estándares internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, *17*(2), 621–653.
- Villa Gómez, J. D. (2013). Consecuencias Psicosociales De La Participación En Escenarios De Justicia Transicional En Un Contexto De Conflicto, Impunidad Y No-Transición. *Psychosocial consequences of the participation in scenarios of transitional justice within a context of conflict, impunity, and no transition. (English)*, 13(2), 307–338. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=95509826&lang=es&site=ehost-live>